

18 de octubre de 2015

# Seguridad Integral Canaria o el lado oscuro del sector de la Seguridad privada en España

Varios informativos, pero especialmente el diario en la red EL CONFIDENCIAL [elconfidencial.com], han ido desentrañando, a los largo de los últimos meses, el enésimo caso de corrupción que afecta al Partido Popular y que tiene a una empresa de seguridad privada como especial foco de atención. Nos referimos a Seguridad Integral Canaria, empresa que no sólo no empaña el buen nombre del sector, sino que incorpora una buena dosis de fétido olor a corrupción a la seguridad privada española, necesitada con urgencia, como punto de arranque, de luz y taquígrafos, y de una considerable limpieza a fondo, como final de trayecto.

Recientemente (8/10/2015), EL CONFIDENCIAL se destapaba con un artículo en el que el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, habría maquillado la contabilidad de la empresa presentando, como si fueran dietas y kilometraje, exentos fiscalmente, otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. La denuncia partía de la Agencia Tributaria en un informe entregado a la jueza de Las Palmas, Victoria Rosell, en junio pasado.

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró “haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%”. Un solo empleado —doblando turnos—, añadía el técnico de la Agencia Tributaria, había “llegado a cobrar más de 20.000 e incluso hasta 40.000 euros en forma de dietas al año, unas cantidades absolutamente ‘estratosféricas’ en comparación con el resto de compañías de seguridad”.

El resultado del informe del perito hablaba de 9 millones de euros defraudados a Hacienda y 12 millones más a la Seguridad Social por todo un cúmulo de “trampas contables” que partían de 2009.

¿Dónde está el problema “político”? Pues en que Seguridad Integral Canaria tenía adjudicada la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la propia Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real, contratos que, en total, “superan los 100 millones de euros” y su dueño, Miguel Ángel Ramírez, veía de ser indultado en 2013 por los “populares” o, para ser exacto por el polémico ministro José Manuel Soria, indulto que, finalmente, fue dejado sin efecto según informaba EL CONFIDENCIAL el 25/6/2015.

Miguel Ángel Ramírez fue condenado en 2011 “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros” y el gobierno de Rajoy lo indultó, si bien es cierto que el Alto Tribunal anuló el indulto, aunque Ramírez no acabó por dar con sus huesos en la cárcel, pese a la condena.



De la calaña de Miguel Ángel Ramírez daba cuenta el diario El MUNDO, en su edición digital del pasado 5/4/2015, cuando denunciaba a la empresa Marsegur que, en septiembre de 2014, se adjudicó el concurso del Ayuntamiento de Madrid —presidido todavía por Ana Botella—, para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas y cuyos trabajadores pasaron de cobrar 1.000 euros a 700 euros en un recorte brutal, frente al que los “populares” hicieron la vista gorda —la corporación “popular” se desentendió absolutamente aduciendo que se trataba, en cualquier caso, de “un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores”—, mientras Ramírez calificó, sin el menor empacho, el recorte del 30% de los salarios de “normal”.

Todas estas barrabasadas, toda esta basura, tiene, como es lógico, su explicación. En su edición digital del 15/7/2013 de LA PROVINCIA. DIARIO DE LAS PALMAS, este informativo aseguraba que “algo más de un tercio de las donaciones económicas que percibió el Partido Popular a lo largo del año 2011 provenían de empresarios canarios. Exactamente, el 37,35% de los ingresos aportados por particulares o empresas durante ese ejercicio se envió directamente desde el Archipiélago a la caja de Génova 13, la sede central de los populares en Madrid. En números redondos, los empresarios de las Islas donaron ese año, en el que se celebraron las últimas elecciones municipales, insulares, autonómicas y generales, 701.200 euros del total de 2.145.070,55 euros que están reflejados en el capítulo de donaciones de la última contabilidad auditada del PP. Casi cuatro veces más de lo que recibieron los populares en 2010” y, entre estas empresas, figuraba Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, en la que aparece como apoderado Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y del Grupo Ralons, amiguísimo de ese ministro amigo, a su vez, de las grandes corporaciones eléctricas que no quieren que en la terraza de tu casa coloques paneles solares.